

Revista de Derecho

SUMARIO:

Editorial:	Régimen tributario.
Humberto Bianchi V.:	La Consulta. Exposición de prácticas judiciales.
V. Loewenwarter:	Derecho Civil Alemán. Algunas características.
Alfredo Larenas:	El patrimonio reservado de la mujer casada, según la nueva legislación. (Continuación).
Raúl Rettig G.:	Tomás Hobbes- Su filosofía jurídica.
Dra. Telma Reca:	La individualización de la pena y el tratamiento de la delincuente.
Jurisprudencia:	Sobre cumplimiento de exhorto. De los efectos que produce la omisión de una deuda en el mandamiento de embargo. Del derecho a alimentos. Nulidad de escritura. Posesión efectiva. De una resolución no apelable. Sobre manifestación minera. Nombramiento de administrador pro-indiviso. De la pluralidad de embargos.

LIBROS Y REVISTAS

LEYES Y DECRETOS

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN — Chile

da en el juicio, que se encuentran ya ejecutoriadas y contra las cuales no se dedujeron en su oportunidad ni posteriormente los recursos que la ley franqueaba al ejecutado para enmendar los errores procesales en que se hubiere incurrido al pronunciarla; y de conformidad también con lo dispuesto en los artículos 87, 92, 167, 197, 205, 236, 456, 469, 463 del Código de Procedimiento Civil, se revoca la resolución de veintiséis de Abril último, escrita a fs. 62, en la parte que niega lugar a lo pedido por el ejecutante en la solicitud de fs. 53, y se declara que ha lugar a dicha petición, y en consecuencia, a despachar el mandamiento de embargo solicitado por el ejecutante en ese escrito; se

suspenden los efectos de ese mismo fallo, en cuanto niega lugar al libramiento pedido por el ejecutante en la solicitud de fs. 57 — que erróneamente se inda ser de fs. 55 —, y se repone el incidente al estado de oírse, en forma legal, a los acreedores hipotecarios a que se alude en el fundamento 13.º; y se confirma en lo demás apelado, la referida resolución de fs. 62.— Devuélvase.— Redacción del señor Ministro Brañas Mac Grath. — *G. Brañas Mac Grath.*— *Constantino Muñoz.*— *J. J. Ortúzar Rojas.*— Dictada por los señores Ministros en propiedad de la I. Corte, don Gonzalo Brañas Mac Grath, don Constantino Muñoz y don Juan Jerónimo Ortúzar Rojas.— *Eirique Urrutia H.,* Sec. Sup.

Del derecho a alimentos

i

DOCTRINA.—El hijo legítimo, menor adulto, no tiene derecho a exigir pensión alimenticia a su padre, si se encuentra en buena salud y sus aptitudes tanto físicas como intelectuales lo facultan para poder

ganarse su subsistencia por sus propios medios. Con un voto en contra que estima que el hijo legítimo puede en cualquiera situación exigir alimentos de su padre.

CITAS LEGALES.— *Códi-*

Del derecho a alimentos

453

go Civil, artículos: 131, 134, 228, 239, 321, 322, 323, 324, 329, 331 y 332. Código de Procedimiento Civil, artículo 335.

SENTENCIA DE SEGUNDA
INSTANCIA

Concepción, diez de Mayo de mil novecientos treinta y cinco. — Vistos: Reproduciendo la parte expositiva de la sentencia de primera instancia y sus citas legales; teniendo presente:

1.º) Que en la demanda de fs. 19, doña Josefina Aravena de Molina pide se declare que su marido, el demandado don Isidoro Molina Alarcón, debe suministrarles alimentos congruos a ella y al menor Isidoro Molina Aravena, hijo legítimo de ambos, regulándose el monto de esa prestación en la suma de doscientos cincuenta pesos o en la que el Tribunal determine, en atención a las entradas de que disfruta el demandado y a los gastos de ambos alimentarios;

2.º) Que el demandado ha reconocido en forma explícita, ser marido de la demandante y padre legítimo del menor Isidoro Molina Aravena, y por lo demás, dichos estados civiles aparecen legalmente acreditados con la libreta de familia acompañada a fs. 1;

3.º) Que el demandado se ha opuesto a las peticiones de la demanda sosteniendo en el libelo de fs. 14, reproducido en el comparendo de trámite, que jamás ha dejado de cumplir sus obligaciones de marido y padre, y que la demandante y su hijo han perdido el derecho de pedir se les preste alimentos de ninguna especie por haberse hecho ambos culpables de injuria atroz;

4.º) Que trabada la litis en estos términos, han quedado sin controvertirse las afirmaciones de la demandante de percibir el demandado, mensualmente, la suma de trescientos noventa y nueve pesos, como ex maquinista de los Ferrocarriles del Estado, y de ser dueño, además, de la propiedad raíz a que se refieren los documentos de fs. 2 y siguientes, que le produce una renta, también mensual de cien pesos;

5.º) Que tampoco, discutió el demandado en la contestación a la demanda, el hecho aseverado por su cónyuge de no tener ella entradas de ninguna especie, y aun cuando con los documentos de fs. 32 y siguientes, y con sus testigos Amadeo Iglesias, Celia Seguel y Juan Cosme Riquelme, examinados al tenor del punto décimo del interrogatorio de fs. 19, ha pretendido acre-

editar que las rentas de la propiedad antes mencionada las recibe la demandante, no ha logrado su propósito, por cuanto esas declaraciones, fueron primero contradichos por los testigos Juan Cristóforo Cerda, Belisario Sepúlveda y Federico Saavedra, al absolver éstos afirmativamente la pregunta quinta de la minuta de fs. 17 y desvirtuadas luego por el mérito de la sentencia agregada en copia a fs. 27; y porque los recibos de fs. 32 y siguientes, aparte de no emanar de la demandante, han sido agregados a los autos sin las solemnidades prescritas por la ley para dar autenticidad en juicio a los documentos privados;

6.º) Que todos los testigos nombrados en el considerando anterior, tanto los tres últimos presentados por la demandante como los tres primeros que lo fueron por el demandado, están contestes en que doña Josefina Aravena de Molina, es una persona enferma e inválida, incapaz de todo trabajo, aún de los simples quehaceres domésticos;

7.º) Que, resumiendo lo dicho, resulta demostrado que concurren en cuanto concierne a la persona del demandante, todas las condiciones necesarias en derecho para dar origen a la obligación alimenticia cuyo

cumplimiento demanda en favor propio, pues son hechos inconcusos o probados en la causa, el vínculo matrimonial que liga a aquélla con el demandado; la falta de medios de subsistencia y la incapacidad física para procurárselos por sí misma que afecta a la demandante; y finalmente, que su marido, el demandado, posee bienes suficientes para subvenir a esa obligación, siendo todavía de advertir en este punto, que la propiedad raíz de que aparece ser dueño, fué adquirida por él a título de compraventa durante la sociedad conyugal;

8.º) Que el demandado no ha acreditado ni intentado acreditar con la debida precisión, como le incumbía hacerlo que cumpla actualmente el deber de suministrar a su cónyuge lo necesario para su congrua sustentación, según sus facultades, pues, no puede tomarse en cuenta para este efecto las declaraciones a que se ha aludido en el considerando quinto de este fallo y que tenderían a demostrar que la demandante ha recibido rentas provenientes de la propiedad en referencia y cuyo valor no se determina en modo alguno;

9.º) Que con respecto a la injuria atroz que imputa a su cónyuge, el demandado, no hay

Del derecho a alimentos

455

otra prueba que lo dicho por los testigos Amadeo Iglesias, Celia Seguel y Juan Cosme Riquelme al contestar la pregunta sexta del interrogatorio de fs. 19 y basta considerar el tenor literal de esa interrogación para concluir, prescindiendo aún de la impresión y singularidad de las respuestas, que esa prueba es inconducente, puesto que versa sobre hechos no comprendidos en el concepto de injuria atroz, tal como él que se desprende de las disposiciones de los artículos 267, 968, 979, 1028 y 1210 del Código Civil, a cuyo estudio comparativo es preciso recurrir en defecto de una definición expresa de la ley;

10.º) Que entrando a considerar la petición de alimentos formulada en favor del menor Isidoro Molina Aravena, cabe establecer en primer término, que no se ha probado que el demandado se negara a cumplir su obligación de educar a su hijo, ni que éste se haya visto en el caso de abandonar sus estudios por falta de recursos, pues de los tres testigos que depone sobre este particular, dos de ellos, Juan Crisóstimo Cerda y Belisario Sepúlveda, dicen saberlo únicamente por lo que les han oído decir a la demandante o al propio menor, y el

tercero, Federico Saavedra, no dá otra razón de su dicho que la de conocer a éste último; y en cambio, consta del documento de fs. 18, expedido por el Inspector General del Liceo de Concepción, que el joven Isidoro Molina Aravena, fué alumno del quinto año de ese establecimiento, y que se retiró el primero de Julio de mil novecientos treinta y cuatro por no tener buena aplicación y considerar perdido el año;

11.º) Que, como se deduce del contenido de ese mismo documento, y lo corroboran las declaraciones de los testigos Amadeo Iglesias, Celia Seguel y Juan Cosme Riquelme, el demandado ha cumplido la obligación de educar a su hijo, proporcionándole esa educación según sus facultades y en forma adecuada a sus condiciones personales y de familia;

12.º) Que habiendo recibido el menor una educación que lo coloca en situación de asegurarse por sí mismo los medios de subsistencia, y estando ya en edad de hacerlo, pues consta del documento de fs. 1 que nació el quince de agosto de mil novecientos dieciséis, no puede legalmente dispensarse del deber natural de trabajar so pretexto de estar el padre obligado a alimentarlo, a menos que probara,

lo que no se ha intentado siquiera, que está incapacitado físicamente e intelectualmente para trabajar o que le es imposible, por causas superiores a su voluntad, encontrar una ocupación en relación con su edad, sus aptitudes y sus demás condiciones personales, que le proporcione los recursos necesarios para su subsistencia;

13.º) Que conforme a las reglas generales, pesaba sobre la parte demandante la causa de probar los hechos que acaban de mencionarse, puesto que ellos constituyen en este caso un requisito esencial para la existencia de la obligación alimenticia cuyo cumplimiento se ha querido exigir al demandado en favor de su hijo legítimo Isidoro Molina Aravena;

14.º) Que es, en consecuencia, inoficioso analizar la prueba con que el demandado ha procurado acreditar su excepción fundada en la conducta observada con respecto a él por su hijo tantas veces nombrado; y de conformidad, también con lo dispuesto en los artículos 131, 134, 228, 239, 321, 322, 323, 324, 329 y 331 del Código Civil, y 335 del de Procedimiento Civil, se revoca la referida sentencia de veintinueve de Octubre de mil novecientos treinta y cuatro, escrita a fs. 37

vta., en cuanto desecha la demanda de alimentos interpuesta en su propio nombre y en provecho personal apto, por doña Josefina Aravena de Molina en el libelo de fs. 10, y se declara que ha lugar a dicha petición, regulándose en la suma de ciento cincuenta pesos la pensión alimenticia que el demandado debe pagar mensualmente a su cónyuge nombrada y se confirma en lo demás apelado la misma sentencia. Acordada por unanimidad en la parte en que revoca la sentencia de primera instancia y dá lugar a la demanda de alimentos interpuesta en su propio nombre y en provecho personal suyo por doña Josefina Aravena de Molina, y contra el voto del señor Ministro Bianchi V., en cuanto confirma en lo demás apelado la sentencia de primera instancia. Dicho señor Ministro no acepta los considerandos 10 a 14 del presente fallo, y está por acceder a la petición de alimentos hecha en favor del menor Isidoro Molina Aravena, cuya cuantía se fijaría con arreglo a la ley, revocando también en esta parte la sentencia apelada, en atención a lo dispuesto en los artículos 222, 231, 232, 321, Núm. 2.º, 323, 324, 330 y 332 del Código Civil, y teniendo también presente que el

Nulidad de escritura

457

hijo menor de edad tiene derecho a pedir alimentos a su padre legítimo, y que no se ha establecido que el menor Molina Aravena tenga medios que le permitan subsistir de un modo correspondiente a su posición social.— Devuélvase.— Publí-

quese en la Gaceta de los Tribunales.— Redacción del señor Ministro Brañas Mac Grath.— *Humberto Bianchi V.*— *G. Brañas Mac Grath.*— *Julio Araos Díaz.*— *Alberto Sanhueza C.*, Secretario.

Nulidad de escritura

DOCTRINA.— *El Código Civil no se ha referido a la formación del consentimiento en los contratos, sino que trata del consentimiento ya formado. En tal situación, debe darse aplicación en materia civil a las disposiciones de los arts. 97 a 106 del Código de Comercio, que se refieren a la formación del consentimiento. La muerte del oferente es causal de caducidad de la oferta. De consiguiente, muerto el vendedor antes de que el comprador expresara su consentimiento, el contrato no se ha perfeccionado.*

Lautaro, veintidós de diciembre de mil novecientos treinta y cuatro.

Considerando:

1.º) Que el demandante solicita en su demanda de fs. 5, se declare nula absolutamente la escritura de compraventa, y el contrato mismo, otorgado el 29 de diciembre de 1931, cuya copia corre a fs. 1, y nula la inscripción del título respectivo, debiendo hacerse la entrega del bien raíz, dentro de segundo día después de ejecutoriada la sentencia, con sus frutos, cuya especie y monto se reservará para discutirlo en juicio distinto o en la ejecución del fallo;

2.º) Que se funda su demanda en las siguientes circunstancias:

a) Que, siendo la compraventa un contrato consensual, éste debe constar por escritura pública cuando versa sobre un in-